

cretaría los recaudos que corresponden, y remítase la presente causa á la Suprema Corte de Justicia para su revision, lo que verificado, devuélvase al Juzgado de su origen para que la prosiga contra Casimiro Perez, lograda que sea su aprehension.

El C. Magistrado de Oaxaca, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal.*—*Ramon Reynoso.*

Es copia que certifico. Querétaro, Agosto 10 de 1874.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general interino dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato, se inició la presente causa en 14 de Julio de 1873, contra Antonio Baltierra y socios, por circulacion de moneda falsa.

Practicadas las primeras diligencias y no habiendo méritos para continuar el proceso, el mencionado Juzgado de Distrito, en 31 de Enero del presente año, mandó sobreseer la causa, cuya determinacion fué confirmada por el Tribunal de Circuito de Querétaro en auto de 13 de Julio próximo pasado.

El que suscribe, encontrando arreglada á derecho esta determinacion que causa ejecutoria conforme al art. 84 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y no encontrando méritos para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, pide se dé por revisada.

México, Setiembre 2 de 1874.—*Velasquez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 3 de 1874. Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanso las actuaciones y

archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis María Aguilar*, secretario.
Son copias. México, Setiembre 8 de 1874.—*E. Lanza.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por D. Joaquin de la Maza Pedrueca, contra el C. Gobernador del mismo Estado que revocó una disposicion del C. Gefe político de Zimatlan, relativa al modo con que deben aprovecharse del agua de "Rio Grande," el pueblo de San Andres del Monte y la hacienda de Tlanichico.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, alegando para definitiva en el juicio de amparo promovido por el español D. Joaquin de la Maza Pedrueca, contra el acuerdo del Superior Gobierno del Estado de 26 de Marzo último, que revocó la providencia de la Gefatura política de Zimatlan de 30 de Octubre anterior, referente á la manera con que habian de dividirse el agua del "Rio Grande," el comun de Santa Ines del Monte y la hacienda de Tlanichico de que es propietario el referido Pedrueca, dice: que si el comun de Santa Ines, hubiera mostrado su inconformidad, respecto de la providencia citada de la Gefatura política de Zimatlan luego que le fué notoriada, inconcuso fuera su derecho para ocurrir al Gobierno del Estado, como inmediato superior de la Gefatura dicha, y no se presentaria dificultad para juzgar con facultades del Gobierno del Estado, para revocar si lo creia justo y oportuno la providencia de un agente subalterno de la administracion. Pero no fué así: el comun de Santa Ines reconoció el derecho de Pedrue-

ca á disfrutar del agua del "Rio Grande," juntamente con el mismo comun de Santa Ines y se conformó con la providencia de la Gefatura, que arregló la manera de distribuir dicha agua. Así consta de la copia del expediente relativo que corre agregado á los autos.

Despues, el agente municipal del comun expresado, C. Gerardo García, recurrió al Superior Gobierno solicitando la revocacion de la providencia del C. Gefe político de Zimatlán, segun aparece del ocurso de 20 de Marzo próximo pasado, que se lee entre otras pizcas, en la copia del expediente referido. En realidad, el agente municipal mencionado trataba de nulificar el reconocimiento de los derechos de Pedrueca, hecho por el comun de Santa Ines y la conformidad de éste, para que se adoptara la manera de hacer efectivos los derechos de uno y otro partícipe al agua del "Rio Grande," supuesto que la providencia del Gefe político, una vez consentida libre y espontáneamente, debía producir fuerza obligatoria, no tanto por sí misma cuanto por la conformidad de los interesados.

Parece, pues, que el conocimiento en el negocio del Gobierno del Estado, como superior gerárquico del Gefe político de Zimatlán, no tiene base legal en que apoyarse, ya que ninguno de los interesados alegó en tiempo inconformidad, ó se valió del recurso respectivo.

Luego la cuestion de si el comun de Santa Ines pudo ó no reconocer si el derecho de Pedrueca por medio de su legal representante, que lo era su agente municipal, ó de si debió necesariamente proceder como formalidad indispensable la intervencion y asentimiento del Superior Gobierno del Estado.

Este Ministerio no cree oportuno tratar esta cuestion, y aun lo juzgaria peligroso para no prevenir el fallo de la justicia ordinaria del Estado, que es la que debe resolverla.

En efecto, la contienda respecto de si la conformidad del comun de Santa Ines, es ó

TOMO VI.—PARTE II.

no legal, de si fué ó no hecha en forma, es un punto contencioso, cuyo conocimiento y decision corresponde esclusivamente á la autoridad judicial.

En concepto del infrascrito, el inferior Gobierno del Estado avanzó á resolver dicho punto, constituyéndose en Tribunal; y asumiendo facultades jurídicas, en abierta pugna con el art. 13 de la Constitucion general de la República.

No puede el Ministerio fiscal pasar desapercibida una circunstancia que por decirlo así, pone mas en relieve la invasion del Gobierno en la órbita de la autoridad judicial.

Pedrueca habia ya solicitado por medio del interdicto posesorio de amparo, que ha creído corresponderle en el caso que se le amparase en la posesion que de la parte convenida del agua del "Rio Grande" ha citado, segun dice, y está disfrutando. Presentó su demanda al Juzgado de 1ª instancia de Villa Alvarez, apoyándola cabalmente en la conformidad y asentimiento del pueblo de Santa Ines, á la providencia de la Gefatura de 30 de Octubre. El auto que recayó á su demanda fué notificado al representante del comun referido, y aparece por las fechas, que lo ha sido con anterioridad al recurso intentado ante el Superior Gobierno del Estado por el comun de Santa Ines, y que tuvo por resultado el acuerdo revocatorio de 26 de Marzo.

Contenciosa la cuestion por su naturaleza y puesta ya en tela de juicio, habia y hay *litis pendencia*. La Justicia comenzaba á proceder, conocia ya del negocio, y á ella, y á nadie mas que á ella, corresponde resolverlo.

Fundado en las razones espuestas que convencen el ánimo del infrascrito, de que con la providencia ó acto que se reclama, se vulnera en el promovente la garantía que otorga en su primera parte el art. 13 de la Constitucion federal y por consecuencia, la que otorga el art. 16 de la misma, pide á V. se sirva declarar que la Justicia de la Union ampara y protege al español D. Joa-

quin de la Maza y Pedrucca, en los términos que lo solicita.

Oaxaca de Juarez, Julio 27 de 1874.—
J. M. Ballesteros.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Agosto 3 de 1874.—
Visto el presente juicio de amparo promovido por D. Joaquin de la Maza Pedrucca, contra el acuerdo del Gobierno del Estado, que revocó una providencia del jefe político del Distrito de Zimatlan (Villa de Alvarez), relativa al modo con que deben disfrutar el agua del "Rio grande" el pueblo de Santa Inés del Monte y la hacienda de Tlanichico de que es propietario el referido Sr. Pedrucca, por considerar violadas en sus personas las garantías que otorgan los artículos 18 y 16 de la Constitucion federal. Visto el informe del Gobierno del Estado, en que manifiesta haber revocado la providencia antes citada, porque el convenio que en ella tuvo lugar, entre el municipio de Santa Inés y el peticionario, no se celebró con los requisitos que previene el artículo 27 de la ley del Estado de 26 de Noviembre de 1857, y por lo mismo no podía apremiar al municipio á su cumplimiento, ni aprobaria jamas el citado convenio, por ser ruinoso para el pueblo de Santa Inés; que la providencia del Gefe político de Zimatlan es indebida, porque viola el derecho de propiedad de aquel, porque siendo propietario del manantial, debe sacar todo el aprovechamiento posible, y porque no dió fuerza alguna al convenio celebrado por resistirlo la parte de Santa Inés; siendo lo natural, que Pedrucca deduzca en juicio el derecho que crea tener á las aguas del rio, pues el Gobierno no puede conservarlo en la tenencia de una usurpacion, ni darle la posesion que legítimamente le corresponda, porque esto toca á la justicia ordinaria. Vista la copia certificada que se acompaña, la cual contiene algunos párrafos del informe que produjo

al Gobierno el Gefe político de Zimatlan, cuyo documento consta íntegro en el testimonio que presentó el promovente. Visto el pedimento fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado por el interesado, y cuanto mas ver convino.

Considerando: que de autos consta plenamente justificado, que habiendo solicitado el propietario de la hacienda de Tlanichico, que el Gefe político de Zimatlan previniese al municipio de Santa Inés, que impidiera á sus vecinos que cambiaran el curso del rio, para evitar los perjuicios que se ocasionarian á la agricultura en general y á los ribereños en particular, aquel funcionario, previa citacion del agente municipal, se trasladó en 30 de Octubre del año próximo pasado, en union del municipio de dicho pueblo y del solicitante, al lugar en donde se distribuyen las aguas y de acuerdo con ellos dispuso: que durante el dia disfrutasen el agua los vecinos de Santa Inés y en la noche el propietario de la hacienda: que en 26 de Marzo último, el Gobierno, á instancia del agente municipal del referido pueblo, que pidió declarara insubsistente en todas sus partes, la disposicion del C. Gefe político, por ser nula la obligacion que contrajo en ella el municipio de Santa Inés en virtud de faltarle los requisitos que prescribe el artículo 27 de la ley de 16 de Noviembre de 1857, revocó la providencia del Gefe político, y mandó que las cosas volvieran al estado que tenian antes del 30 de Octubre citado, porque el convenio que en esa fecha se celebró, no fué aprobado por el Gobierno del Estado.

Considerando: que así mismo está plenamente justificado, que en 9 del mismo Marzo, D. Joaquin de la Maza Pedrucca, promovió ante el Juzgado de 1ª instancia de Zimatlan, interdicto de amparo de posesion del agua de que se trata, en virtud de la providencia dictada por el Gefe político; que el auto que recayó á este escrito, fué notificado al representante del municipio de Santa Inés en 12 de dicho mes.

Considerando: que segun los principios generales de derecho administrativo, los convenios privados que se celebran entre particulares y personas morales que arreglan un derecho privado, están sujetos en sus resultados, al conocimiento de la autoridad judicial; que las discusiones á que puedan dar lugar despues de consumados, pertenecen á los tribunales civiles, y á ellos solo corresponde juzgar, así de los autos que precedieron á los convenios, como de los que sirven para comprobarlos, sea cual fuere la forma de los convenios, y el modo con que se hayan celebrado; pues una vez consumado el contrato, cualquiera que sea la forma con que se haya ejecutado, no se trata de otra cosa, sino de aplicar las leyes civiles á una convencion privada, y cualesquiera que sean las escepciones que se opongan, los tribunales civiles tienen plenitud de jurisdiccion para decidir las.

Considerando: que si bien el artículo 27 de la ley del Estado de 26 de Noviembre de 1857, dispone: que los ayuntamientos continúen gozando de los beneficios de la minoridad que les concede la legislacion vigente, arreglando todos sus actos y negocios á las formalidades que aquella prescribe para los menores, no autoriza al Gobierno del Estado, para que erigiéndose en tribunal, resuelva sobre la validez ó nulidad de los convenios que los ayuntamientos celebran con los particulares; pues esta declaracion, es de la exclusiva competencia de la autoridad judicial; que ademas de esta consideracion, se presenta la muy notable de haber prevenido en el conocimiento del negocio de que se trata el Juzgado de 1ª instancia de Zimatlan.

Considerando: que el municipio de Santa Inés, al otorgar libre y espontáneamente su consentimiento, para que la distribucion de las aguas se verificara de la manera que acordó el C. Gefe político, contrajo por este solo hecho, una obligacion, y concedió á Pedrueca el ejercicio de un derecho.

Con fundamento de lo dispuesto por los

artículos 101 y 102 de la Constitucion federal y fraccion 1ª del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, la Justicia de la Union ampara y protege á D. Joaquin de la Maza y Pedrueca, contra el acuerdo del Gobierno del Estado de 26 de Marzo último, que revocó la providencia del C. Gefe político de Zimatlan de 30 de Octubre del año próximo pasado, por haber violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 13 y 16 del Código fundamental de la República.

Hágase saber; publíquese y elévense estos autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

El C. Juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Pedro Pardo.*—*Manuel Galindo*, secretario.

Es copia de su original que obra en el juicio respectivo. Oaxaca de Juarez, 3 de Agosto de 1874.—*Manuel Galindo*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 9 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por D. Joaquin de la Maza Pedrueca, contra el C. Gobernador del mismo Estado que revocó una disposicion del C. Gefe político de Zimatlan, relativa al modo con que deben aprovecharse del agua de Rio grande, el pueblo de Santa Inés del Monte y la hacienda de Tlanichico, propia de Pedrueca, por cuya revocacion considera el quejoso violadas en su persona, las garantías á que se refieren los artículos 13, 16 y 27 de la Constitucion general.

Considerando: que en el expediente aparece que Pedrueca ha estado desde tiempo inmemorial disfrutando de parte del agua en beneficio de la hacienda; que la disposicion del Gobernador de 26 de Marzo de este, revocando la providencia del Gefe polí-

tico de Zimatlan de 30 de Octubre del año anterior, previene: que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes del 30 de Octubre citado, de la que resulta que no se han atacado con tal disposicion los derechos de Pedrueca; que si algunos tienen que alegar respecto de la validéz del convenio que se dice celebrado entre él y los vecinos del pueblo de Santa Inés, el referido 30 de Octubre del año próximo pasado, de cuyo convenio emanó la providencia del Gefe político, esos derechos deben ventilarse en el juicio respectivo y no son materia de amparo.

Considerando, por último: que en las facultades del Gobernador está revocar ó no las providencias del Gefe político, sin que esto importe juzgar por leyes privativas ni por Tribunal especial, contra lo que dispone el artículo 18 de la Constitucion general, ni tampoco infringir el 16 ni el 27 de la misma.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que dispone el artículo 101, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada en este juicio á 13 de Agosto próximo pasado, por el Juez de Distrito de Oaxaca, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Joaquin de la Maza Pedrueca, contra el acuerdo del Gobierno del Estado de 26 de Marzo último, que revocó la providencia del Gefe político de Zimatlan de 30 de Octubre del año próximo pasado, por haber violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 18 y 16 del Código fundamental de la República.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guz-*

man.—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre de 1874.—*Enrique Landa*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por el C. Guillermo Prieto, como defensor del reo Agustín Rosales, sentenciado á la pena de muerte por el homicidio perpetrado en la persona del C. Lic. Manuel Bolado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Guillermo Prieto como defensor de Agustín Rosales, quejándose de que habiendo sido sentenciado su defendido á la pena de muerte por el delito de homicidio en la persona del C. Lic. Manuel Bolado, ocurrió por equivocacion al C. Presidente de la República, impetrando la gracia de indulto que le fué denegada; que como no pudo otorgársele por el C. Presidente de la República por carecer de facultades, pues el artículo 85 de la Constitucion, fraccion 15, solo se la concede, tratándose de reos sentenciados por los Tribunales federales, los que incontestablemente no juzgaron á su defendido, pedía al Juzgado mandara suspender la ejecucion de la sentencia, hasta que el Poder Legislativo declarara cual era la autoridad competente para conceder ó negar el indulto. Por un otro sí agregó, que se referia al artículo 14 de la Constitucion federal, en cuanto que dispone, que ninguno sea sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al caso y por autoridad competente.

Sustanciado el punto de la suspension en la forma debida, el Juzgado la decretó, mandando que el C. Juez de lo criminal rindie-